



**Las reformas del Gobierno amenazan
el futuro de las pensiones públicas**

¡NI UN PASO ATRÁS!





Antonio García Sinde
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El rápido empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, las subidas estratosféricas de los precios y el deterioro acelerado de los servicios públicos, que en comunidades como Madrid alcanza niveles tercermundistas, golpea duramente a las y los pensionistas.

Las contrarreformas de 2011, bajo un Gobierno PSOE, y de 2013, bajo un Gobierno PP, iniciaron un camino de recortes salvajes de las pensiones que el actual Ejecutivo de coalición PSOE-UP ha mantenido a pesar de sus promesas electorales. La firma en junio del pasado año de un acuerdo con la CEOE, CCOO y UGT, que analizamos en su momento*, confirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se disponía a aplicar las medidas de recorte del gasto en pensiones impuestas por la Unión Europea como contrapartida al desembolso de los fondos europeos que ya se han empezado a recibir.

En respuesta a este acuerdo, el 16 de octubre de 2021 decenas de miles de personas llegadas desde todos los territorios del Estado nos manifestamos en Madrid al grito de “¡Gobierno quien gobierne, las pensiones públicas se defienden!”. Pero el Gobierno del PSOE y UP ha hecho oídos sordos a las demandas del movimiento pensionista y continúa con sus políticas de ataque y promoviendo una nueva agenda privatizadora. La manifestación prevista para el próximo 15 de octubre va a ser, de nuevo, la respuesta masiva del movimiento pensionista y de toda la clase trabajadora a estas políticas que chocan abiertamente con las expectativas que la victoria electoral del PSOE y UP habían despertado.

Los pensionistas y los trabajadores siempre pagamos los platos rotos

El efecto conjunto de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 provocó, según datos del Banco de España, una caída del

importe de las nuevas pensiones de algo más del 5%. Para los capitalistas españoles ese recorte todavía es poco. Por eso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha diseñado nuevas medidas, cuya implantación progresiva ya está en marcha y que, según cálculos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, recortarán las futuras pensiones entre un 5,5% y un 12% adicional.

Este ataque implacable a las y los pensionistas no se hace por capricho. Recortar las pensiones permitirá reducir aún más las cotizaciones a las empresas, contribuyendo así a inflar los beneficios empresariales, que no dejan de crecer trimestre tras trimestre.

La Unión Europea, férrea defensora de los intereses del capital, condiciona la continuación de la entrega de los 144.000 millones de préstamos y ayudas que recibirá el Estado español, que en su inmensa mayoría irán a parar al bolsillo de la banca y las grandes empresas, a la rápida aprobación de nuevos recortes. La escalada armamentística por la guerra de Ucra-

Las reformas el futuro de ¡El 15-0

nia y la subida de los precios de la energía quieren descargarlos sobre los hombros de la clase trabajadora, y consideran que el ataque a las pensiones es una vía fácil para conseguirlo.

La penalización de la jubilación anticipada, con descuentos que en el caso de trabajadores despedidos a pocos años de la jubilación ordinaria llega hasta el 30%, fue la primera de las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición.

Le siguió la aprobación de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), un nombre rimbombante bajo el que se oculta la privatización parcial del sistema de previsión social. De acuerdo con el objetivo del Ministerio de Seguridad Social, la aprobación de los PPE permitirá que en pocos años más de 13 millones de trabajadores, el 80% de la población activa, tengan una parte de su pensión privatizada. ¡Un extraordinario regalo que hace el Gobierno PSOE-UP a la oligarquía financiera nacional e internacional!

Más amenazas en el horizonte

Tres nuevas amenazas se ciernen ahora mismo sobre las futuras y futuros pensionistas.

La primera es la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones hasta los 35 años de cotización. Los torpes intentos del ministro Escrivá para convencernos de que esta medida es beneficiosa para los futuros pensionistas han sido desmentidos tajantemente por el Banco de España, que en un informe publicado el pasado 14 de septiembre calcu-

Entrevista a Gerardo Ruiz Catalán, portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Móstoles

► VIENE DE LA CONTRAPORTADA

EM.- Uno de los pilares de la contrarreforma de las pensiones promovida por el ministro Escrivá es su progresiva privatización a través, entre otros instrumentos, de los llamados Planes de Pensiones de Empleo. ¿Podríais explicarnos qué son y qué peligro representan para jubilados y trabajadores en activo?

GR.- El bocado más grande de lo público que queda es el Sistema Público de Pensiones. Al neoliberalismo no se le escapa este hecho y a un ministro neoliberal tampoco, aunque hay que recordar que las leyes nacen en un Consejo de Ministros y se aprueban en un Parlamento. No solo de Escrivá vive el comienzo de la privatización del Sistema Público de Pensiones.

Los planes de pensiones existen desde hace años en España, pero con poca

incidencia. El Plan Escrivá, aprobado recientemente, ha creado un macrofondo de pensiones de empleo que cuenta con el apoyo y promoción del Estado pero que estará gestionado por bancos o gestores financieros.

Este macrofondo detraerá recursos del Sistema Público de Pensiones e ingresos del Estado al contar con desgravaciones fiscales para quienes los suscriban y para las empresas. Solo favorecerá a las rentas altas (trabajador@s con sueldos altos) y a la oligarquía financiera.

El funcionamiento consiste en que la persona que lo suscriba recibe una parte de su salario mediante un ingreso en el fondo de pensiones y la empresa pone otra cantidad.

Estos planes solo podrán ser suscritos por las personas con salarios altos, por lo que en el futuro habrá dos tipos de pensionistas. Por un lado, aquellos con un al-

to poder adquisitivo en su etapa laboral que tendrán dos pensiones cuando se jubilen: la del Sistema Público y la del fondo; y por otro, el resto de pensionistas, la inmensa mayoría, que contarán con una pensión meramente asistencial ante el debilitamiento que supondrá la detracción de ingresos que provocará el macrofondo en el Sistema Público de Pensiones.

EM.- En nuestra opinión, habría que unificar las luchas sindicales y sociales que están arrancando en todos los territorios del Estado. CCOO y UGT parecen preferir su dispersión y fragmentación. ¿Os parece necesario avanzar decididamente hacia la organización de una huelga general en defensa de las condiciones de vida de la clase trabajadora?

GR.- A nosotr@s nos parece que no solo es necesario unificar todas las luchas sindicales y sociales ahora dispersas, si-

no que además es urgente dado el rápido deterioro de las condiciones de vida de l@s trabajador@s (en activo o jubilad@s). De ahí que promovamos la jornada del 15 de octubre.

A las generaciones ahora jubiladas nos costó mucho ir conquistando unos derechos y unos servicios públicos que nos permitieran tener una vida digna. Nadie nos regaló nada, todo hubo que conquistarlo y vemos con estupor las grandes zancadas hacia atrás que se están dando.

Ante este panorama, ante la batalla por el individualismo que va ganando el neoliberalismo, sí, creemos que es necesario avanzar hacia una movilización colectiva general que imponga la defensa de salarios, pensiones y servicios públicos que nos permitan vivir con dignidad en todas las etapas de nuestra vida.

As del Gobierno amenazan e las pensiones públicas todos y todas a Madrid!

la que la ampliación del periodo del cómputo del cálculo de las pensiones desde los 25 años actuales a los 35 supondría un recorte generalizado de la cuantía de las nuevas pensiones de un 8,2%.

La segunda amenaza afecta no solo a las personas que se jubilarán en el futuro, sino a las y los actuales pensionistas. Al aprobar la última reforma de las pensiones, el PSOE y UP presentaron como un gran logro la desaparición del factor de sostenibilidad implantado por el PP en 2013 y que no había llegado a entrar en vigor.

Ese factor condicionaba las futuras actualizaciones anuales de las pensiones a unos cálculos que tenían en cuenta la situación financiera de la Seguridad Social —muy debilitada gracias a la avalancha de desgravaciones que solo benefician a los empresarios— y la evolución de la esperanza de vida. Se trataba, en suma, de un mecanismo que garantizaba la progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y el consiguiente empobrecimiento de las y los pensionistas.

El triunfalismo del PSOE, y sobre todo de UP, hubiera tenido alguna justificación si no fuera porque el “factor de sostenibilidad” fue sustituido por el “factor de equidad intergeneracional”, que podría cumplir exactamente la misma función a partir de 2027.

Ese “factor de equidad intergeneracional” aún no está definido totalmente. Según los compromisos con la UE, se concretará en este mismo año. Por eso es necesario reforzar la movilización para obligar al Gobierno a renunciar a la im-

plantación de un mecanismo que recorte en el futuro el importe de las pensiones.

La última de las amenazas proviene de lo que el Ejecutivo presentó como uno de sus mayores éxitos: la revalorización de las pensiones según el IPC.

Esta medida, que sería muy positiva si de verdad supusiera la actualización de las pensiones al aumento del coste de la vida, se aprobó en un momento en que la inflación era muy baja y, aprovechando esa circunstancia, el Gobierno la utilizó para tapar los aspectos más regresivos y lesivos de su reforma.

Hoy las circunstancias económicas han cambiado y el gobierno se resiste a hacer realidad su compromiso. Aunque el IPC está ya en un 9,3% interanual, y a pesar de que la alimentación, la luz y el gas, que son una parte fundamental de los gastos de las y los pensionistas han subido muy por encima de esa cifra, el gobierno ha avanzado a los medios de comunicación que espera subir las pensiones entre un 8,5%, es decir, poco más de la mitad de lo que han subido los alimentos en lo que va de año y muy lejos de recuperar los cuatro puntos de poder adquisitivo perdidos en 2021.

¿Cómo lo harán para incumplir su propia ley? En vez de aplicar el IPC acumulado al final de año, que es el único que mide realmente la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno quie-

re aplicar una media de las variaciones mensuales del IPC interanual. ¡Vulgares trucos estadísticos para intentar camuflar un recorte puro y duro del importe de las pensiones!

La actualización de las pensiones según el IPC real acumulado es una demanda irrenunciable del movimiento pensionista, como también lo tiene que ser la demanda de un mecanismo de actualización automático que aplique a la cuantía de las pensiones las subidas mensuales del IPC. ¡Si los empresarios quieren seguir subiendo los precios para inflar aún más sus ganancias, que no sea a costa de las y los pensionistas!

El 15 de octubre el movimiento pensionista vuelve con más fuerza

Diluidas ya las expectativas de que la formación de un Gobierno de coalición con UP podría significar un cambio de rumbo en la política social, y con CCOO y UGT dispuestos a apoyar un “pacto de rentas” que imponga topes a la subida de las pensiones, ante el movimiento pensionista solo se abre un camino: el de promover la más amplia movilización social.

Muy correctamente, el llamamiento a la movilización del 15 de octubre, que desde Izquierda Revolucionaria apoyamos activamente, vincula la defensa de las pensiones con la actualización de los salarios también según el IPC acumulado real y con la defensa de los servicios públicos.

La bandera que levanta el movimiento pensionista es la de toda la clase trabajadora. Están presentes todas las condiciones para que esta movilización sea el inicio de una amplia respuesta social a más de una década de ataques salvajes a nuestras condiciones de vida. Nuestro futuro está en juego y solo una movilización enérgica en las calles nos permitirá entrar en la senda de recuperación de nuestros derechos arrebatados con la excusa de la crisis.

* *El Gobierno de coalición, con el apoyo de CCOO, UGT y la CEOE, da un paso más hacia el recorte de las pensiones* (izquierdarevolucionaria.net, bit.ly/3dKyy9C).



Entrevista a Gerardo Ruiz Catalán

Portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Móstoles

Es necesario y urgente unificar las luchas. Este 15-0 debería ser un primer pasito hacia una huelga general

Desde hace años, los pensionistas son la punta de lanza de los colectivos que luchan por unas condiciones de vida dignas para la mayoría, contra los recortes sociales y por unos servicios públicos de calidad. Al grito de “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”, han inundado en multitud de ocasiones las calles de las principales ciudades del Estado.

Ahora, cuando el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se dispone a aplicar las medidas de privatización y recorte del gasto en pensiones impuestas por la Unión Europea, “olvidando” así sus promesas electorales, los pensionistas se preparan para redoblar su respuesta y se disponen a tomar nuevamente las calles.

Entrevistamos a Gerardo Ruiz Catalán, portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Móstoles, para que nos explique sus reivindicaciones y objetivos.

El Militante.- El 15 de octubre las organizaciones y plataformas de pensionistas de todo el Estado os movilizaréis en Madrid en una jornada de acción que se prevé multitudinaria. ¿Cuáles son los objetivos de esta manifestación?

Gerardo Ruiz.- L@s pensionistas llevamos casi 5 años movilizados permanentemente en defensa del Sistema Público de Pensiones y de todo lo Público.

Salarios y pensiones van estrechamente unidos. Salarios bajos, además de precariedad, generan cotizaciones bajas

que merman recursos para el pago de las actuales pensiones y acarrearán pensiones bajas en el futuro.

Uno de los objetivos principales del 15 de octubre, ante la ofensiva de Gobierno y patronal de limitar salarios y pensiones, es unificar esfuerzos de cara a conseguir unas condiciones de vida dignas para toda la clase trabajadora, en activo o jubilada.

Debería ser un primer pasito hacia una huelga general dado el rápido deterioro de las condiciones de vida ante la galopante subida de precios y degradación de los servicios públicos.

EM.- El Gobierno de Pedro Sánchez propone un Pacto de Rentas entre Gobierno, sindicatos y patronal, es decir, una limitación en las subidas de salarios y pensiones, como una de sus principales medidas para hacer frente a la ola inflacionista. ¿Qué opinión os merece? ¿Creéis que la revalorización de las pensiones según el IPC real está en peligro?

GR.- El Pacto de Rentas en nuestra opinión es un nuevo intento de echar en las espaldas de l@s trabajador@s (en activo o jubilad@s) las debilidades económicas actuales por las que pasa el neoliberalismo imperante, como cada cierto tiempo, limitando las subidas de salarios y pensiones.

La revalorización de las pensiones según el IPC real “no está en peligro” porque nunca se aprobó oficialmente. Aunque los acuerdos de gobierno entre PSOE y UP la preveían en el punto 2.4.1, no se plasmó en la Ley. Una vez más nos engañaron al aplicarnos el IPC medio, lo que nos hizo perder un 3% de poder adquisitivo en 2021 y otro 3% en 2022. Un 2,5% en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas.

Pero sí, creemos que la revalorización de las pensiones según el IPC medio, conseguida por nuestros casi 5 años en las calles, peligra si ese infame Pacto se llega a firmar.

CONTINÚA EN EL INTERIOR ►

